



Independencia de la Justicia

15

Balance de las recomendaciones anteriores

En el EPU de 2018, sólo se realizó una recomendación relacionada con la independencia judicial. Francia hizo un llamado al Estado colombiano para “Combatir la impunidad por los delitos cometidos durante el conflicto garantizando la independencia del poder judicial”.

Según la Constitución Política colombiana, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación son los más altos cargos que buscan la garantía y promoción de los derechos humanos, la protección del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes ejercen funciones públicas.

Durante los últimos cinco años en Colombia, estos cargos han sido elegidos por personas cercanas al Presidente. A pesar del evidente conflicto de interés, dichos funcionarios han tomado decisiones que han respondido al interés del primer mandatario de la época, siendo cuestionada la independencia con la que orientan sus actuaciones. Un ejemplo claro ha sido la actuación del Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, reconocido por su cercanía y amistad con el ex presidente Iván Duque, quien no ha contribuido con la disminución de los índices de impunidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos, sino que se ha concentrado en invadir las competencias del Congreso de la República, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, así como participar en política, y lanzar discursos estigmatizantes contra las personas defensoras y quienes protestan.

Desafíos

El cambio de gobierno en 2022 generó que los altos funcionarios del Ministerio Público llevaran a cabo acciones como obstáculos para los programas de gobierno, especialmente aquellos relacionados con la Paz Total.

Tal es el caso del Fiscal General de la Nación quien ha incurrido en invasión de competencias del Congreso de la República, de la Corte Constitucional y del Consejo de Estado en evidente vulneración de la separación de poderes; desconociendo la ley que regula los procesos de paz, incurriendo en ilícita participación en política, incluso convocando a reuniones con los partidos de la coalición para indicarles que debían votar en contra de los programas de iniciativa gubernamental. En actos públicos a nivel nacional e internacional faltando a la verdad, ha señalado al gobierno de favorecer la cadena del narcotráfico, incluso estigmatizando las organizaciones populares.

Igualmente, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello, quien se ha encargado de llevar a cabo acciones de oposición política en contra de las iniciativas del actual gobierno, a través de la realización de reuniones con partidos políticos, donde les ha solicitado apartarse de la coalición del gobierno.

Estas actuaciones se ubican al margen de sus obligaciones misionales de estas instituciones y se ponen al servicio de la oposición política, en claro perjuicio a la división de poderes y la independencia que debe caracterizar su función, al asumir una actitud de abierta oposición a los programas del gobierno, especialmente el relacionado con la política de Paz Total.

Recomendaciones

1. Evitar la participación en política por parte de los funcionarios que componen el Ministerio Público, teniendo en cuenta la interferencia a la separación de poderes en el Estado.
2. La Fiscalía General de la Nación evite acciones de persecución contra personas que defienden los derechos humanos o ejerzan el derecho a la protesta social, formulando imputaciones que jurídicamente no estén soportadas.
3. Instar al gobierno nacional a seleccionar una terna para la fiscalía con personas independientes, calificadas, idóneas, comprometidas con la justicia y los derechos humanos; e impulsar reformas a la justicia que involucre la selección del Fiscal General de la Nación y los Altos cargos de la justicia.